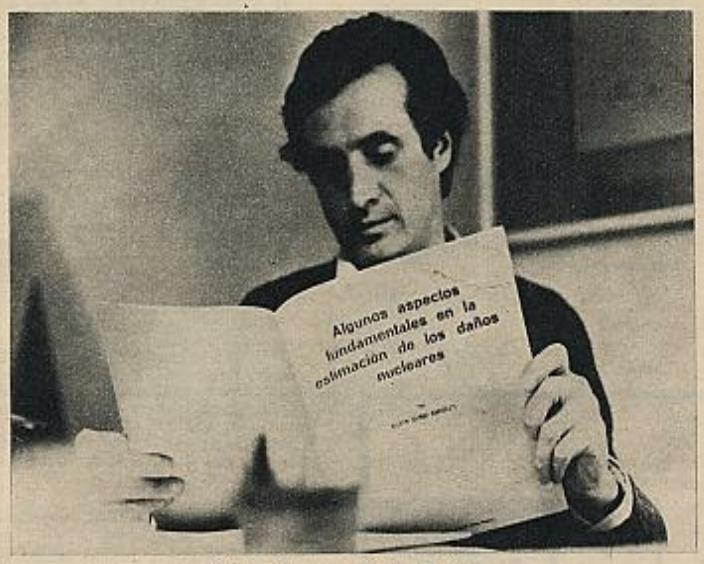
LEON

«Guerra caliente» nuclear

● La escalada de errores administrativos en el tema nuclear ha alcanzado el punto álgido —por ahora— en el caso de Valencia de Don Juan (León). El gobernador civil de la provincia no tomó en consideración un escrito firmado por cuarenta y cuatro alcaldes de la comarca afectada —alegando defectos de forma—, en el que se solicitaba autorización para una mesa redonda, el sábado día 14, para discutir sobre el proyecto de central nuclear en el río Esla, sin proceder, por otra parte, a comunicar su negativa a ninguno de los firmantes. Horas antes de la proyectada reunión, la Policía procedió a la detención de don Carlos Carrasco, secretario general de AEORMA (Asociación Española para la Ordenación del Medio Ambiente), uno de los invitados a la mesa redonda.



Carlos Carrasco Muñoz de Vera.

Pese a las gestiones personales de los alcaldes, la mesa redonda no pudo ser autorizada. Cuando los alcaldes y vecinos quisieron interesarse por la situación del señor Carrasco —anteriormente, una comisión visitó al gobernador y obtuvo una clara evasiva sobre la detención—, la Fuerza Pública, sin previo aviso, arremetió contra ellos, golpeando a diestro y siniestro, siendo uno de los primeros heridos el mismísimo alcalde de Valencia de Don Juan, don José María Alonso; esto estuvo a punto de provocar una auténtica batalla campal, produciéndose una docena de heridos (incluidos algunos policías) y siendo detenidas nueve personas.

El martes fueron puestos en libertad tanto el señor Carrasco como tres de los otros detenidos, después de ser multados. El secretario de AEORMA fue sancionado con 100.000 pesetas, por «organizar, convocar y difundir» la celebración de la mesa redonda, pese a la evidencia de lo contrario y a la insistencia de los alcaldes tanto en conseguir esa reunión como en querer oír a los miembros cualificados de esta Asociación.

La central nuclear proyectada por las empresas nacionales ENDESA y ENHER constituye un «rebote doble», dado que los intentos de instalarla en Escatrón (Zaragoza) y en Chalamera (Huesca) han encontrado distintos obstáculos. En el primer caso, aunque Escatrón ha aceptado su instalación por muy especiales circunstancias (ENDESA y Eléctricas Reunidas de Zaragoza van a desmantelar una central térmica que funciona allí desde los años cuarenta y de la que vive prácticamente todo el pueblo), el veto que parece pesar sobre la instalación de nuevas centrales nucleares en el Ebro aconsejaba el traslado del proyecto. En la alternativa de Chalamera (río Cinca), ENDESA y ENHER se estrellaron con una oposición en toda la regla, por lo que, pocos días después de manifestado el rechazo popular, solicitaban autorización para un «nuevo» proyecto en Valencia de Don Juan...

Todo parece indicar que ambas empresas estaban dispuestas a agotar todos los recursos a su alcance (ellas creen que muchos) para vencer «a la tercera», y de ahí el empeoramiento de la situación al cerrarse en banda ante las peticiones de la comarca de más información y ciertas aclaraciones. Decenas de Ayuntamientos y Consejos Locales del Movimiento, Hermandades de Labradores, Comunidades de Regantes y diversas entidades han impugnado el proyecto, que se ha revelado apresurado, falsificador, parcial y lesivo gravemente para la zona.

En el escrito que los cuarenta y cuatro alcaldes hicieron público después de conocer la negativa de las autoridades a la mesa redonda, se quejaban de la «falta total de cooperación por parte del gobernador civil hacia los problemas de la comarca, que, en lugar de ir a visitarla y convocar a los alcaldes para tomar conciencia, se ha limitado a enviarnos la Policía». Pocos días después, el gobernador manifestó su intención de crear una comisión —presidida por él— de alcaldes y vecinos, con el fin de tratar directamente con la Administración el asunto.

La dureza de la multa impuesta a AEORMA en la persona de su secretario general parece resumir la hostilidad y falta de simpatía de que esta Asociación medioambiental goza en los medios oficiales. Solamente AEORMA ha llevado a cabo —con independencia absoluta y extremada precariedad de medios— una campaña de información y asesoramiento sobre los problemas de la energía nuclear y de las centrales que se intenta instalar en España. También en este tema, las directrices oficiales están identificadas casi totalmente con los planes de las grandes compañías eléctricas, como demuestra, entre infinidad de detalles, el insistente bloqueo a reuniones, conferencias y mesas redondas, donde ni la Administración ni las compañías suelen conseguir justificar sus pretensiones o mantener sus tesis.

El castigo impuesto a AEORMA, real y a la vez simbólico, supone un error más en el proceder oficial, que será absolutamente contraproducente, sobre todo si se pretende frenar la ola de oposición popular a las centrales nucleares. De momento, Valencia de Don Juan no ha podido informarse debidamente por impedirlo la autoridad, pero es obvio que se insistirá en este derecho inexcusable. La respuesta dada a la exigencia de decenas de municipios (que pese a todo siguen siendo «estructuras básicas de la convivencia nacional») deja abierto y sangrante el conflicto, pero no resuelto. ■ **PEDRO COSTA MORATA.**

MADRID

Moratalaz-Este, sin escuelas

● De nuevo, en Moralataz el problema de la enseñanza salta al primer plano de los problemas del barrio, ante la actitud pasiva del Ayuntamiento.

La raíz del problema es el desfase entre el equipamiento real en materia de enseñanza y las promesas municipales, incumplidas, en esta materia. La situación, por el momento, es la siguiente: ninguna guardería, jardín de infancia o centro preescolar; tres colegios nacionales mixtos de ochocientas cuarenta plazas cada uno; un colegio nacional para cuatrocientos niños y otro con las mismas plazas para niñas; un colegio privado con mil plazas. En total existen 4.120 plazas escolares, cifra que, remitida al total de la población en edad escolar de la zona Moratalaz-Este, arroja un déficit de 2.500 niños sin posibilidades de encontrar plaza dentro de la zona, teniendo que trasladarse a Vallecas, Puente de Vallecas o Legazpi. Singularmente agudo es el problema de las guarderías en un barrio de componente mayoritariamente obrera (metal y construcción, especialmente) y en el que las mujeres tienen que trabajar para asegurar otro sueldo con que mantener la familia, cuya media de hijos suele ser, aproximadamente, de cuatro (aproximadamente, 1.500 niños en edad de guardería).

El aspecto más sangrante reside, como decíamos más arriba, en el incumplimiento de las previsiones municipales y la actitud de las autoridades ante este hecho. Teóricamente, en febrero de este mismo año deberían haber estado finalizados dos colegios nacionales de novecientas sesenta plazas cada uno y se deberían haber iniciado las obras de un colegio nacional con quince unidades de solar y de otros dos con treinta y cinco unidades cada uno. También estaba prevista la construcción de un Instituto de Enseñanza Media con capacidad de diez mil plazas, existiendo igualmente otros dos solares teóricamente destinados a guardería.

Transcurridos cuatro meses desde la fecha fijada por el propio Ayuntamiento para la conclusión de las primeras unidades escolares, los vecinos se encuentran con que ninguno de estos magníficos proyectos han sido **ni siquiera iniciados**, dándose el caso de que para algunos no se ha procedido todavía a la adjudicación de las obras. La conclusión evidente es que el próximo curso la población escolar de Moratalaz-Este deberá seguir trasladándose a otros barrios si quieren estudiar y las madres hacer milagros con los pequeños si pretenden trabajar.

Sin embargo, el problema escolar no agota las deficiencias existentes en Moratalaz-Este, barrio sometido a la misma situación degradada que sus homónimos destinados a albergar a la población trabajadora. De hecho, el nivel de equipamiento en lo que respecta a servicios sociales es casi inexistente (con la excepción tal vez del sanitario, pues